

FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS POLÍTICO

Open Course Ware



FUNDAMENTOS DE ANALISIS POLITICO

Open Course Ware - UPV-EHU

Igor Ahedo Gurrutxaga (Creative Commons License)



Profesor

Igor Ahedo Gurrutxaga

Departamento de Ciencia Política y de la Administración

Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea

Tema 4:

ACTORES

Valles (2000) plantea una serie de características comunes que permiten delimitar a los actores políticos colectivos: a) ser una asociación voluntaria, b) su estabilidad relativa, y c) la existencia de una comunidad de intereses y objetivos. Sin embargo, la dificultad no estriba en diferenciar a éstos de los actores individuales, sino que se encuentra más bien en los límites entre unos y otros actores colectivos.

Tradicionalmente se han identificado tres tipos, a priori claramente definidos: grupos de interés, partidos políticos y movimientos sociales. Sin embargo, la delimitación teórica entre estos tres actores-tipo se ve cuestionada en la práctica como consecuencia de la pluralidad y heterogeneidad de estructuras organizativas, repertorios de acción, etc... De esta forma, los límites parecen ser difusos cuando descendemos a casos concretos.

A efecto clarificadores, Ibarra y Letamendia (1999) proponen un esquema que permite identificar estos actores en base a 8 variables: su orientación hacia el poder, las relaciones con los partidos, su organización, los intereses y grupos representados, los medios de representación, el tipo de acción colectiva, la estrategia y los objetivos finales.

En base a este esquema podemos presentar una serie de diferencias que delimitan cada grupo, al menos teóricamente:

- Los partidos políticos tratan de ejercer el poder político, los movimientos sociales de cambiarlo, y los grupos de interés eligen influir en las decisiones de quienes lo detentan.

- Los partidos políticos y los movimientos sociales se rigen por intereses generales e indeterminados —públicos— y los grupos de interés por intereses normalmente determinados —privados—.
- La organización de los partidos tiende a ser jerárquica, la de los movimientos sociales tiende a ser horizontal o en red, y los grupos de interés pueden ocupar cualquier lugar entre estos dos extremos, aunque se tiende a la formalización para maximizar los beneficios de la presión.
- Los partidos políticos responden a criterios de representación electoral, los movimientos sociales se rigen por marcos interpretativos de vocación universal y señas de identidad colectiva, y los grupos de interés por las preferencias constatadas de sus miembros.
- Los partidos compiten electoralmente entre sí y organizan campañas para obtener votos, los movimientos sociales optan normalmente por el conflicto frente al poder formal, y la propia naturaleza de los grupos de interés determina una estrategia básica de cooperación y negociación, más o menos encubierta, con los actores institucionales: su acción es el *lobbying* o hacer pasillos en los foros reales de decisión.

Tipos de actores colectivos.

	Partidos	Grupos de interés	Movimientos
Orientación hacia el poder político	Ejercerlo	Presionarlo	Cambiarlo
Relaciones con los partidos		Complementaria	Conflictiva
Organización	Jerárquica, formalizada	Formalizada	Horizontal, informal, en red
Intereses /grupos representados	Indeterminados, determinables	Determinados	Indeterminables, indeterminados
Medios de representación	Electorales	Convencionales	No convencionales
Tipo de acción colectiva	Agregar intereses generales	Agregar intereses sectoriales	Intereses e identidad
Estrategia	Competencia	Cooperación	Conflicto
Objetivos finales	Sistémicos	Asistémicos	Asistémicos potencialmente

Fuente: Ibarra & Letamendia, 1999.

Pasaremos a describir a continuación los elementos analíticos más importantes para caracterizar cada uno de estos tipos de actor colectivo.

4.1.- Los partidos políticos.

El origen es la primera de las dimensiones que posibilita el análisis de los rasgos más significativos de los diferentes partidos políticos. Tal y como apunta Martínez Sospedra (1996), éste puede ser a) parlamentario, resultado de la unión entre cargos electos con los mismos intereses tratando de conectar con una base social que les puede otorgar determinados apoyos; b) de origen exterior, es decir, nacidos a partir de instituciones o grupos sociales que participan en el sistema político; y c) resultantes de una escisión o fusión.

El desarrollo histórico de este tipo de actores colectivos muestra que han ido asumiendo determinados perfiles en función de cada contexto concreto, de las necesidades del momento y de las exigencias de quienes los promueven (Valles, 2000). De esta forma, y atendiendo a la estructura interna, podemos aproximarnos a la tradicional división de Duverger (1974) entre partidos de cuadros, de masas y de electores.

- Los partidos de cuadros tratan de incorporar a una minoría selecta de la ciudadanía a través de su movilización sobre la base de los beneficios que podría reportar a la comunidad la elección del notable y su consecuente acceso a los círculos de decisión. Por sus características internas, el nivel de institucionalización será bastante débil, la disciplina escasa, la autonomía de las elites electas sobre las partidistas será muy alta, y la ideología poco fundamentada.
- El partido de masas surge de la estructuración política de la socialdemocracia, siendo adaptado posteriormente por el resto de corrientes ideológicas. A diferencia del anterior modelo, los mecanismos de adhesión son más formales, la ideología está muy definida, y el aparato directivo fuertemente estructurado y centralizado.
- El partido electoral de masas, o partido de electores, pretende una adhesión interclasista por medio de la atenuación de los elementos ideológicos, la

estructuración abierta que permita la incorporación de nuevos sectores sociales, la posición preeminente de los cargos públicos, y el reforzamiento del liderazgo, incluida su personalización (Valles, 2000; Duverger, 1974; Panebianco, 1990).

Rockan (1970) y Seiler (1980), así como Letamendía (1997), hemos visto, desarrollan un esquema que presenta las cuatro fracturas derivadas de la modernidad a) en base a su origen (revolución industrial o revolución nacional) y b) a partir de su ubicación en el eje territorial o funcional:

- El *cleavage* Iglesia/Estado opone a los partidos clericales y los anticlericales, ya que mientras que los primeros apuestan por reforzar la influencia política y social de la Iglesia, los segundos proponen la separación entre ésta y el Estado así como la secularización de la vida social. Esta división genera dos familias de partidos: (a) en la vertiente clerical la democracia cristiana, que es heredera de las luchas político religiosas del pasado, (b) en la vertiente anticlerical aparece una familia de partidos que podemos calificar como laicos o seculares.
- El *cleavage* centro/periferia -al igual que el anterior, de origen cultural-, opone a las familias de partidos centralistas de las de los regionalistas, autonomistas, federalistas o independentistas (Seiler, 1990). En cualquier caso, como derivación del mismo, podemos diferenciar entre formaciones abiertas a la descentralización del Estado, y partidos cerrados a cualquier modificación del sistema administrativo.
- El *cleavage* sector primario/sectores secundario y terciario opone los intereses urbanos, comerciales e industriales de los de los campesinos. Genera una única familia que se basa en la defensa de los intereses del mundo rural: los partidos agrarios.
- El último *cleavage* poseedores/trabajadores diferencia los intereses de los medios de producción y los de los trabajadores, determinando las dos familias de partidos más importantes existentes en Europa. Del lado de los “poseedores” encontramos aquellos partidos que mediatizan la voluntad política de los

círculos industriales, financieros o comerciales -en los que la defensa de la ortodoxia liberal se constituye en fundamental-; por el contrario, la familia de partidos “trabajadores” median en la voluntad política del mundo del trabajo, y especialmente del movimiento sindical (SEILER, 1980, 1990).

Sin embargo, existen diferentes posibilidades a la hora de establecer tipologías de sistemas de partidos en los diferentes Estados. Una de las clasificaciones más aceptada es la de Sartori. Para este autor, en primer lugar se deben dilucidar dos elementos relevantes: (a) la fuerza electoral, concretada en escaños mide las posibilidades de coalición o de chantaje de un partido dentro del sistema en cuestión; y (b) la polarización, o distancia ideológica que separa los partidos en competencia.

“Combinando ambos criterios se elabora la siguiente tipología: sistemas de partido único; de partido hegemónico (que no permite la competición de otros partidos por el poder); de partido predominante (un único partido mantiene una posición de mayoría absoluta de escaños durante al menos tres legislaturas consecutivas); bipartidista; de multipartidismo limitado y moderado (entre tres y cinco partidos con escasa distancia ideológica entre sí, con una competición bipolar de bloques y una tendencia centrípeta); multipartidismo extremo y polarizado (más de seis partidos relevantes, con considerable distancia ideológica entre sí, que da lugar a oposiciones bilaterales y a una competición multipolar de tendencia centrípeta); y multipartidismo atomizado (en el que el poder se encuentra totalmente fragmentado, con diez, veinte, o más partidos relevantes)” (Sartori, 1976; en Oñate, 1997, 267).

A su vez, el análisis de Sartori puede completarse con la tipología utilizada por Lijphart (2000: 75), quien, precisamente a partir de la obra de Jean Blondel, trata de completar los estudios elaborados por el primero. De esta forma, establece cuatro categorías de sistemas de partidos. En primer lugar delimita a) el sistema bipartidista, dominado únicamente por dos grandes partidos, en el que a pesar de que pueden existir otras formaciones en el Parlamento, sin embargo no cuentan con un número de escaños lo

suficientemente significativo como para ser tomados en cuenta o condicionar las políticas de alianzas en este sistema. La segunda tipología sería b) la de “dos partidos y medio”, que caracteriza aquellos casos en los que existen dos grupos importantes, y un tercero que a pesar de ser significativamente menos poderoso que los anteriores presenta un potencial de coalición y un papel político importante. En tercer lugar, nos encontramos con sistemas multipartidistas cuando existen más de “dos partidos y medio”, pudiendo ser (c) multipartidista con un partido dominante, o (d) multipartidista sin partido dominante.

4.2. Los Grupos de presión.

Como señala Jordana (1999) los mecanismos formales de representación de la democracia liberal se agotan, en principio, en los partidos y las instituciones, con lo que no se logra integrar el conjunto de opiniones e intereses de la sociedad. Este elemento permite (y obliga) a la experimentación de otras formas de intervención sobre el proceso político. En este sentido, las asociaciones de intereses recogen y recrean las percepciones de determinados segmentos de la sociedad, especializándose en la defensa de esas preferencias sobre determinados elementos de la vida social, cultural, económica; en definitiva, en la representación de los intereses.

Junto a este elemento, es necesario incorporar un segundo aspecto para acercarnos a los grupos de intereses: la legitimidad, que se obtiene de la gestión eficaz de la tensión surgida entre la capacidad que estos grupos tienen para ganarse la confianza de los potenciales representados, y la satisfacción de éstos últimos en la medida en que la asociación sea capaz de maximizar sus beneficios.

Finalmente, Jordana añade un tercer componente esencial en la caracterización de estos colectivos: la existencia de una dimensión de intervención sobre el proceso político.

Estos tres elementos pueden observarse en la definición que propone Jerez (1997: 295), según la cual el grupo de interés *“es un actor del sistema social que, básicamente, desarrolla la función de la articulación de las aspiraciones de individuos o colectivos (representación) que, sin ellos, actuarían directamente sobre los poderes públicos (intervención) en las direcciones más dispares. Estos grupos contribuyen a proporcionar racionalidad, congruencia y viabilidad (legitimidad) a las demandas de cuantos comparten una determinada posición frente a otros sectores del sistema social”*.

Como hemos visto, estos colectivos actúan sobre el ámbito social (entendido como sub-sistema económico para los grupos de interés, o como sub-sistema cultural para los de promoción). Sin embargo, en ocasiones, este ámbito puede resultarles insuficiente para satisfacer sus intereses, con lo que se verán obligados a descender a la arena política para alcanzar el éxito en sus objetivos. Como señala Jerez (1997), éste es el elemento que permite diferenciar a los grupos de interés de los grupos de presión. En tanto en cuanto la asociación permanezca en el escenario social seguirá siendo considerada grupo de interés. Por el contrario, en el momento en que trate de incidir directamente sobre el entorno político pasará a ser considerado grupo de presión: esto es, *“la organización o colectivo de personas que ante todo busca influir en política o promover sus ideas dentro de un contexto económico y político determinado, incidiendo en el proceso de toma de decisiones mediante su actuación sobre los poderes ejecutivo, legislativo o judicial –bien directamente o a través de la opinión pública- para moldear la formulación de las políticas públicas o condicionar su implementación”* (Jerez, 1997: 297).

A la hora de realizar una aproximación teórica a estos colectivos, es necesario detenerse en los tipos posibles de grupos de presión (o interés). Así, podemos establecer una diferenciación en cinco modelos posibles (JEREZ, 1997):

- Organizaciones de empresarios e inversores: se constituyen como uno de los grupos de presión más importantes en este sistema de economía de mercado, y aunque en un primer momento surgieron para tratar de influir en las decisiones

políticas, en la actualidad, además de esta función, y como consecuencia de la presión sindical, se han visto impelidos a jugar el papel de interlocutores ante los sindicatos a la hora de fijar las relaciones laborales.

- Los sindicatos: Encontramos tres tipos ideales de estructura sindical en función de criterios ideológicos y de organización: (a) el modelo pluralista formado por asociaciones muy fragmentadas y con escasa disposición a una cooperación organizada y a la cogestión empresarial; (b) el modelo corporativo, integrado por sindicatos unitarios que desarrollan una predisposición a la cogestión en el plano empresarial y a la cooperación con los órganos institucionales; y (c) el modelo sindicalista, constituido por centrales organizativamente separadas y unidas por una ideología, que vienen rechazando cualquier intento de participación empresarial basada en el *statu quo* capitalista, a pesar de que en la práctica de las relaciones laborales se hayan mostrado bastante pragmáticos.
- Grupos profesionales y de trabajadores independientes: entre los cuales se pueden incluir las asociaciones de agricultores y ganaderos, profesiones liberales, burócratas, o el colectivo militar.
- Grupos al servicio de los intereses públicos: que bajo una denominación un tanto engañosa puede integrar asociaciones tanto de orientación preponderadamente materialista como asociaciones de orientación no materialista. Podríamos destacar por su importancia a las iglesias.
- Finalmente, algunas tipologías incluyen a las propias administraciones públicas cuando tratan de presionar ante otras instituciones. Este es el caso de algunas regiones ante instancias supra-estatales como la Unión Europea. De hecho, el marco europeo de acción colectiva que se había centrado hasta fechas recientes en los límites definidos por el Estado-nación se encuentra en un contexto de crisis derivado de un triple proceso de erosión de su soberanía: a) desde arriba, viéndose obligado a ceder muchas de sus competencias a los órganos comunitarios, b) desde abajo, ya que las unidades sub-estatales asumen cotas de

poder como consecuencia de los procesos de descentralización, y c) lateralmente, porque el Estado se ve afectado por sus límites en la legitimidad (Keating, 1996). En definitiva, nos encontramos ante un nuevo modelo de acción colectiva caracterizado por el alumbramiento un nuevo marco de relaciones intergubernamentales que se presentan en la actualidad a diferentes niveles (Europeo, Estatal, Regional y local), lo cual ha favorecido la salida al campo internacional de las regiones (Morata, 1999).

De esta forma, se observan diferentes vías de participación y representación de intereses por parte de las unidades sub-estatales en la Unión Europea: a) las directas, Comité de las Regiones, Consejo de Ministros, Comisión Europea, van a depender, excepto en el primero de los casos, de la voluntad de las autoridades del centro; b) las indirectas se refieren a la participación en la formación de la voluntad estatal; c) más allá de estos mecanismos, se establecen otros de carácter informal centrados en el *lobbying* directo en los centros de decisión supranacionales; y finalmente d) destaca la importancia de los mecanismos de cooperación interregionales, intra o inter-estatales (Jauregi, 1997; De Castro, 1994).

Por su parte, Valles (2000) establece otra tipología complementaria con la anterior: a) los grupos de interés (o presión) económicos, b) los que integran a determinados colectivos sociales en función de sus características de género, edad, residencia..., c) los grupos de interés que promueven determinadas causas de contenido cultural o ideológico en sentido amplio, y d) los que persiguen ciertos objetivos políticos, pero sin aspirar a la elaboración de un proyecto global de gobierno.

Finalmente, los repertorios de actuación de estos colectivos son amplios, abarcando desde lo constitucional a lo inconstitucional, de lo legal a lo ilegal: a) persuasión, b) la presión electoral, c) la presión mediática d) la amenaza o intimidación, e) el uso del poder económico, f) el litigio judicial, g) sabotaje en sus diversos grados, y h) acción directa en su diversas facetas, convencional, disruptiva y/o violenta.

4.3 Los movimientos sociales. Acercamiento teórico

Las respuestas académicas que tratan de explicar el desarrollo de los movimientos sociales en las sociedades occidentales pueden agruparse en tres categorías: a) los modelos clásicos para el estudio de la acción colectiva, b) la teoría de la movilización de recursos y sus derivaciones, y c) las aproximaciones culturalistas.

Aproximaciones clásicas.

Una de las primeras aproximaciones clásicas será la que trata de explicar el desarrollo de sucesivas fases de movilización colectiva (flujos revolucionarios del movimiento obrero decimonónico en 1830-1840 y 1880-1890, lucha de clases en el periodo de entre-guerras, y ciclo de protesta de los 60-70) a partir de explicaciones centradas en el análisis de las causas del comportamiento colectivo (*collective behavioral*).

Este modelo va a fundamentarse en varios presupuestos: a) el comportamiento no institucional-colectivo trata de enfrentarse al contexto y las normas sociales existentes, b) las tensiones y la frustración social impelen al individuo a participar en la acción colectiva, c) ésta se desarrolla siguiendo un ciclo vital en el que la acción espontánea de las masas antecede a la opinión pública y los movimientos sociales, y d) dentro de este ciclo, los movimientos se logran mediante procesos de comunicación como rumores, contagios, reacciones culturales, difusión (Cohen, 1985, en Riechmann y Fernández Buey, 1999).

Según esta perspectiva, el comportamiento colectivo presenta dos rasgos básicos:

- El carácter emergente: a) la conducta es espontánea, b) es informal y no estructurada, frente a la lógica de las instituciones, c) es improvisada y poco predecible.

- Su componente extra-institucional: a) las normas de la acción no tienen por qué ser las determinadas por la cultura dominante, b) no es convencional, ni acorde con las normas establecidas, y c) genera nuevas normas.

De la misma forma, existen varios rasgos secundarios para caracterizar a la acción colectiva: a) carácter cambiante e inestable, b) elementos emocionales, como reactivación a una determinada problemática, c) incumben a un amplio sector, directamente proporcional a la amplitud de los afectados por la problemática (Javaloy, 2001).

En definitiva, esta corriente va a ser el resultado de la convergencia de dos líneas de pensamiento: el interaccionismo simbólico y el funcionalismo estructural. La primera va a partir de una perspectiva psico-sociológica que, trata de explicar los procesos de autorregulación y los de aprendizaje social e innovación que afectan al comportamiento colectivo desde la conducta individual. La segunda línea explica el surgimiento de los movimientos como consecuencia de tensiones derivadas del desarrollo desigual en determinados sub-sistemas (industrialización, secularización, democratización,...). Dos corrientes complementarias que confluyen en la teoría del comportamiento colectivo resolviendo incógnitas micro-sociales la primera, y macro-sociales la segunda.

En cualquiera de los casos, este modelo presenta serias limitaciones en la medida en que vincula a las personas que participan en los movimientos sociales con la imagen del comportamiento desviado de individuos marginales y desarraigados (Riechmann y Fernández Buey, 1999; Casquette, 1996).

Por su parte, las teorías de la privación relativa entienden los movimientos sociales como un fenómeno racional. Desde una perspectiva psicologista o conductista, se intenta explicar la acción colectiva como el resultado de la tensión entre unas determinadas expectativas sociales –los beneficios deseados o anhelados- y las que se creen posibles. Las primeras son las cualidades que los individuos o colectivos creen que deberían tener, y las segundas son estas mismas cualidades, pero entendidas como

algo que se logra. Cuando existe un desfase entre ambas nos encontramos ante la privación relativa (Sanders, 1997). De esta forma, se asume una concepción según la cual determinados bienes materiales, culturales o de otro tipo, son substraídos al individuo o al colectivo cuando éstos creen que les corresponderían. Así, se establece una diferenciación entre la privación relativa individual o la privación relativa colectiva, que en el segundo caso hace más factible la atribución externa de responsabilidades, lo que aumenta las potencialidades movilizadoras de la percepción de la injusticia, y del surgimiento de la protesta (Klandermans, 1997) e incluso la violencia (Gurr, 1970).

En cualquier caso, esta teoría va a verse sometida a una serie de críticas, fundamentalmente centradas en sus connotaciones unidireccionales -la percepción de la privación produce movimientos-, olvidándose su dimensión bi-direccional -los movimientos también producen percepciones de privación- (Javaloy, 2001).

De la misma forma, esta aproximación remite nuevamente a la identificación entre movimientos sociales y sectores marginales de la sociedad, ya que se centra fundamentalmente en la privación material, lo cual impide explicar los rasgos interclasistas que asumen los colectivos contenciosos de la década de los 70. En definitiva, los mecanismos de privación relativa no pueden explicar movimientos sociales cuyos integrantes son, en su mayoría, privilegiados

La tercera de las aproximaciones teóricas clásicas a los movimientos sociales es la de la elección racional. Para el principal de los representantes de esta corriente, Olson, la acción colectiva no es el resultado de agravios o sentimientos de injusticia, sino que son elecciones hechas con la intención de lograr determinados fines. Los individuos se mueven fundamentalmente por el interés, actuando únicamente en la medida en que existan incentivos selectivos o bienes colectivos (Fireman & Gamson, 1979) que les motiven para la acción. En definitiva, el elemento central de la racionalidad explicativa de la acción colectiva se basa en el hecho de que los individuos no participarán en ésta más que en la medida en que los beneficios esperados puedan superar los costes de su actuación (Olson, 1992); una concepción que surge de las interpretaciones de Dows

(1973) sobre el comportamiento electoral, que desde las mismas claves consideraba que un determinado individuo solo vota un partido en tanto en cuanto considere que le será más útil que otro, o que no votar.

Este modelo va a verse sometido a varios tipos de críticas (Ward, 1997):

- Los propios defensores de esta corriente, como Simon, van a rebajar los criterios de racionalidad sustituyendo la lógica de las decisiones óptimas por la lógica de las satisfactorias.
- Desde otra perspectiva, se rechaza la concepción individualista y exógena de las preferencias, y la visión individualista de la perspectiva de la elección racional, apostando por la profundización del papel de las estructuras sociales, las normas, ideologías y culturas en la movilización colectiva.
- Finalmente, desde las aproximaciones psicologistas se rechaza el olvido de las limitaciones emocionales, las orientaciones afectivas, los límites cognoscitivos,... en el esquema racionalista de la participación colectiva. De la misma forma, se apuntan elementos que se sitúan al margen de la racionalidad leída en clave de costos-beneficios, tales como la venganza o el altruismo.

Por su parte, Marx (2001) delimita tres distorsiones presentes en el trasfondo de esta aproximación: a) las teorías de la elección racional hacen desaparecer la noción de identidad, una vida interior que aunque es parte del comportamiento observado, no es idéntica a él, b) las motivaciones del individuo son reducidas a incentivos y recompensas externas, y c) el papel de los movimientos sociales en el cambio de valores individuales es ignorado o distorsionado por el instrumento conceptual de los incentivos.

Finalmente, la efectividad de los anteriores modelos interpretativos se ve cuestionada a finales de los años setenta por una serie de acontecimientos observables en gran cantidad de movimientos sociales que proliferan en las sociedades occidentales: a) los individuos participantes no eran desarraigados, alienados o actores irracionales, sino individuos con una gran capacidad cognitiva, perfectamente integrados en la sociedad, y

b) su acción colectiva no era el resultado de una frustración relativa provocada por una crisis económica del sistema, sino que debían buscarse otro tipo de argumentaciones (Casquette, 1996).

La teoría de la movilización de recursos.

Como respuesta nos encontramos dos aproximaciones teóricas que se desarrollan geográficamente en EEUU y Europa respectivamente, la primera de las cuales se centra en la explicación del “cómo” de los movimientos sociales, y la segunda en la justificación de su “por qué” (Melucci, 1980; Ibarra, 2000).

El enfoque de la movilización de recursos trata de analizar la eficacia de los movimientos sociales en la satisfacción de sus objetivos a partir de los recursos que disponen. Como apunta Ibarra (1993: 42), *“implícita o explícitamente, esta corriente académica entiende que los individuos eligen apoyar o participar en un movimiento social y no en un partido político, básicamente (...) porque consideran que sus demandas van a ser a la larga mejor atendidas por el movimiento elegido ya que éste tiene, en una determinada reivindicación, más interés en promocionarla y más capacidad de presión, que los partidos políticos existentes”*.

En definitiva, el problema para esta aproximación no es caracterizar la existencia de un potencial movilizador derivado de conflictos sociales, insatisfacciones o frustraciones, sino que se fundamenta en el análisis sobre cómo es posible que determinadas organizaciones sean capaces de movilizar ese potencial. De esta forma, esta aproximación obliga a tener en cuenta a) el papel de los “empresarios movimentistas” en la creación y dirección de estas asociaciones, b) las estructuras internas que permitan maximizar su eficacia en la acción contenciosa, c) las características de una planificación organizativa asentada en cálculos conscientes sobre cómo satisfacer sus objetivos, y d) los mecanismos de perpetuación.

El tercero de estos rasgos conecta las teorías de la movilización de recursos con las de la elección racional, y, como señala Ibarra (1993), aunque las últimas se ocupan por las estrategias individuales, y las primeras por las organizativas, ambas responden al mismo sustrato utilitarista olsoniano. En cualquier caso, siguiendo a este autor, tampoco puede considerarse que desde esta aproximación teórica se aplique el modelo economicista en estricto sentido, ya que se incorporan determinados elementos explicativos que van más allá de la lógica de los costes y beneficios, y se acepta una eventual utilización de mecanismos de intervención no convencionales, diferentes a los que se observan en el repertorio de los partidos.

En definitiva, para esta perspectiva, la movilización social es resultado de factores como los recursos disponibles, los modelos organizativos, y las oportunidades para la participación en la acción colectiva. Estrategia, recursos y organización son los ejes de esta aproximación (Tejerina, 1998). Posteriormente, esta teoría se ha acompañado de las aportaciones de autores como McAdam, permitiendo la incorporación del estudio de las condiciones sociales que permiten analizar el desarrollo del movimiento: a) las políticas, que vinculan este modelo con los del análisis de la estructura de oportunidad política, b) las económicas, que ligan la prosperidad material con la ampliación de los recursos, y c) las organizacionales (Javaloy, 2001).

Como en las anteriores aproximaciones, las teorías de la movilización de recursos no escapan a las críticas del modelo olsoniano: a) desde una lógica utilitarista no se da respuesta a la participación en la acción colectiva de grupos emergentes, b) las dimensiones culturales del conflicto se escapan a su marco analítico, c) se identifica al movimiento social con las organizaciones del movimiento, cuando el primero siempre es más de las organizaciones que engloba, y d) se olvidan los contenidos de la movilización, su relación con las ideologías, los desarrollos culturales,... (Riechmann & Fernández Buey, 1999).

En sentido similar, autores como Marx (1980) o Zurcher y Snow (1981) (citados en Javaloy, 2001) señalan la exclusión de los elementos psico-sociales en esta corriente: la participación se reduce nuevamente a un problema de costos-beneficios, de forma que

los individuos son abstraídos de un ambiente conflictivo que puede impulsarles a la acción; el compromiso, la ideología y la emoción son olvidadas...

Por su parte, Ibarra (1993: 43) considera que esta interpretación, en su versión más radical, entiende a los movimientos sociales como actores provisionales, coyunturales o subsidiarios de los partidos políticos. *“Los movimientos sociales, desde este enfoque interpretativo no surgen con vocación opositora a los partidos políticos. Los movimientos sociales nacen con vocación (...) de utilizar el poder político a favor de sus intereses y proyectos. Las personas (...) se organizan en movimientos sociales porque (...) los partidos no están excesivamente interesados en (sus) demandas (...), y por tanto los ciudadanos en cuestión, deben, aunque no lo deseen, tratar de solucionar sus problemas a través de una instancia que es percibida como subsidiaria.*

La perspectiva culturalista, enfoque de redes y nuevos movimientos sociales.

En un intento por superar las críticas de los enfoques de la movilización de recursos, el modelo de las redes entiende los movimientos sociales como manifestaciones de networks socio-espaciales latentes, cuyo elemento aglutinador son comunidades de valores (Kaase, 1990; citado en Reichmann y Fernández Buey, 1999).

En términos similares se pronuncia Diani (1998: 244), quien define movimiento social como *“un conjunto de redes de interacción informales entre una pluralidad de individuos, grupos y organizaciones, comprometidas en conflictos de naturaleza política o cultural, sobre la base de una específica identidad colectiva”*. A su juicio, esta definición presupone que los movimientos sociales no pueden reducirse o identificarse con meros actos de protesta, organizaciones políticas, o coaliciones.

- Los movimientos no pueden vincularse con los actos de protesta ya que necesitan de activistas que los vehiculen, así como definiciones de la realidad que asignen significados a estos acontecimientos.
- Los movimientos sociales no son simples coaliciones de actores que ponen en común recursos para lograr objetivos compartidos; no, mientras no exista una identidad colectiva.
- Tampoco se deben confundir con las organizaciones que pueden unirse al movimiento, ya que mientras las primeras presentan altos niveles de control sobre sus miembros, la red en conjunto se basa en relaciones informales.

En definitiva, la perspectiva de Diani (1998) parte de la concepción de las redes de movimientos como explicación de los vínculos que surgen de la acción, pero sobre todo como resultante de la elección de los actores. En este sentido, la visión tradicional se acerca al movimiento-red desde las precondiciones para la acción colectiva. Para el mantenimiento de movilizaciones eficaces en el tiempo es necesario la existencia de fuertes lazos entre los diferentes actores. O planteado de otra forma, *“la densidad de las relaciones entre los diferentes actores y su articulación interna orientará la circulación de recursos esenciales para la acción y determinará sus oportunidades y vínculos”* (Diani, 1998: 247): por ejemplo, los lazos puntuales pueden reconducirse posteriormente en otros tipos de movimientos, las relaciones previas pueden concretarse en nuevos contextos...

Sin embargo, para este autor, las redes de movimientos también pueden ser analizadas como producto de la acción: como el resultado de una selección de aliados o de pertenencias. *“La estructura de la red depende de, al menos en parte, de las elecciones relativas a los sujetos con quienes entablar relaciones de cooperación o intercambio, o bien de oposición y conflicto”* (Diani, 1998: 248). Estas elecciones vendrán determinadas por elementos como la pertenencia de clase, la posición territorial, el parentesco; y se realizan a través de un costoso ejercicio de selección (*networking*), en el que además de permitirse la circulación de recursos o informaciones de unos grupos a

otros, se construyen representaciones compartidas para la acción: *“mediante el networking se atribuye sentido a prácticas que de lo contrario permanecerían aisladas e independientes unas de otras, y se desarrollan sentimientos específicos de solidaridad entre actores anteriormente desconocidos”*.

Este elemento remite, en consecuencia, a uno de los núcleos de la definición de Diani, que diferencia esta perspectiva de las anteriores escuelas teóricas, y más en concreto de la de la movilización de recursos: la identidad colectiva, noción determinante para diferenciar a los actores del movimiento de sus aliados externos y los apoyos ocasionales. En este sentido, los cálculos estratégicos que posibilitan la interacción de diferentes actores en base a perspectivas instrumentales parecen insuficientes, siendo necesaria la pre-existencia o construcción de una identidad compartida que permita la continuidad y éxito de estas interacciones, y sirva de instrumento para activar la movilización.

La incorporación de la identidad al análisis de los movimientos sociales nos introduce definitivamente en la perspectiva culturalista, (en la que sin duda se circunscribe la anterior aproximación) que se centra en explicar no tanto el mantenimiento de los movimientos sociales, sino su causalidad, el “por qué” de esta forma de acción colectiva.

La existencia de una identidad compartida es uno de los elementos nucleares de esta aproximación que se desarrolla fundamentalmente en el marco geográfico europeo. Así, el movimiento se convierte para el sujeto participante en un espacio desde el cual puede reconstruir simbólicamente sus percepciones sobre la realidad, los campos de reconocimiento y antagonismo con respecto a otros individuos y actores. De esta forma, se reconstruye un “nosotros” a partir de su posición ante un determinado conflicto.

Por otra parte, y en segundo lugar, la perspectiva europea considera el surgimiento de los movimientos sociales como una respuesta articulada a determinadas dimensiones de la realidad social, política o ideológica. En definitiva, una respuesta a la cultura existente, entendiendo ésta como marco estable y dominante por el que se interpreta la realidad y se actúa en consecuencia. Así, los movimientos sociales reaccionan ante la

aparentemente inevitable y tajante división del espacio público y el privado, y el subsiguiente monopolio de los partidos en la primera dimensión. En este sentido, a diferencia de los análisis de la movilización de recursos, desde la perspectiva culturalista se considera que los movimientos sociales no son complementarios a los partidos políticos, sino que los individuos colaboran en los movimientos porque consideran factible una nueva forma de hacer política, más democrática y participativa, menos convencional, aunque no por ello se proponga la sustitución de éstos en el acceso y ejercicio del poder político.

Desde esta perspectiva surge un enfoque complementario, el de los nuevos movimientos sociales, que centra su objeto de estudio en un determinado contexto: los colectivos que surgen en occidente tras la segunda guerra mundial, y más concretamente desde los años 60. Por tanto, son unos movimientos sociales específicos que tienen su origen en una determinada configuración histórica.

De esta forma, se establece una distinción entre los movimientos sociales y los nuevos movimientos sociales, observándose una serie de elementos distintivos que diferencian a algunos colectivos surgidos en la segunda mitad del siglo XX, frente a anteriores experiencias movimentales.

- Su punto de partida es el rechazo a una determinada configuración cultural, política, económico y/o cultural (Touraine, 1974).
- Son portadores de unos nuevos valores, post-materialistas, que desplazan a la tradicional divisoria entre izquierdas y derechas, y se centran más bien en conflictos en torno a los valores (Inglehart, 1991 y 1994)
- El sujeto de estos movimientos ya no es la clase obrera, sino que se constituye por varios segmentos bien diferenciados: (a) nuevas clases medias ligadas a los servicios sociales o el espacio público, (b) elementos de la vieja clase media, (c) sectores que se sitúan al margen del mercado de trabajo (Reichmann & Fernández Buey, 1999; Casquette, 1996).

- Una estructura informal basada en modelos descentralizados y en red, que tratan de superar con su práctica organizativa una configuración social ante la que se oponen (Ibarra & Letamendia, 1999; Diani, 1998).
- Una dinámica de acción colectiva ampliada a repertorios no convencionales o incluso violentos (Barnes & Kaase, 1979; Tarrow, 1997; Casquette, 1996)

El siguiente cuadro trata de explicitar en las **diferencias** entre el viejo y el nuevo paradigma:

Paradigmas explicativos de los Movimientos Sociales

	Nuevo paradigma	Viejo paradigma
Base ideológica	Crítica de la cultura y de la modernización Crítica de la democracia representativa Orientación a valores generales y objetivos concretos	Conformismo cultural Conformismo con la democracia representativa Orientación ideológica en sentido tradicional (izquierda-derecha, conservador-liberal).
Valores	Autonomía personal e identidad Post-materialismo Motivación hacia los bienes colectivos	Libertad y seguridad en el consumo privado y progreso material Materialismo Motivación hacia el interés individual
Base social	Al margen de la estructura de clase, aunque predominan los de las clases medias	Estructura de clases. Desfavorecidos
Organización	Redes informales Estructura descentralizada, asamblearia Asociaciones horizontales, democracia directa	Estructuras formales Organización centralizada, jerárquica

Formas de acción	Política de protesta Medios no convencionales dirigidos a los medios de comunicación	Confrontación entre partidos, regla de la mayoría Oposición a la acción directa
-------------------------	---	--

Fuente: Javaloy, 2001

En definitiva, el análisis de los movimientos sociales muestra un alto grado de fragmentación, de forma que se ha presentado un esquema interpretativo plural en el que aparentemente no existirían conexiones, centrado (a) en las dimensiones psicologistas explicativas de la conducta individual en organizaciones colectivas, (b) en las perspectivas organizativas internas que explican los modelos de acción colectiva, y (c) en las dimensiones estructurales y culturales que justifican las causas de una acción, fundamentalmente entendida como contenciosa.

Hacia una perspectiva unitaria

En cualquier caso, estos modelos (sobre todo los de la movilización de recursos y la perspectiva culturalista-identitaria) no son excluyentes, sino más bien complementarios. Mientras que los primeros se centran en la instrumentalidad de la acción social (*cómo* se emplean los recursos para alcanzar los fines), los europeos se fundamentan en los procesos de comunicación y de formación de identidades y proyectos. De esta forma, el análisis de los movimientos sociales puede integrar ambas modelos:

- El modelo pragmático aporta al culturalista recursos para explicar (a) la forma en que el movimiento social, una vez constituido, se adapta y relaciona con el contexto social, político y económico existente, o (b) los mecanismos de estructuración internos planteados para responder a sus necesidades...

- El modelo culturalista explica el surgimiento y continuidad de estos colectivos más allá de las oportunidades puntuales, del contexto oportunista, centrándose en las formas en que se mantiene en el tiempo la explosión emocional constituyente (Ibarra, 1993). De esta forma, la identidad sirve para construir un discurso constituyente, pero también para explicar cómo se adapta éste a los nuevos cambios externos que también le afectan.

Una aproximación unitaria al análisis de los movimientos sociales, en definitiva, parte de la necesidad de incluir todas las variables posibles: *“cómo determinadas crisis estructurales prefiguran determinadas selecciones de recursos; o cómo las formas organizativas están influidas por la conciencia colectiva del grupo; o cómo el contexto político marca la normalidad o la diferencia de los ideales y las prácticas cotidianas de los movimientos; o cómo, en fin, hay que tener siempre en cuenta tanto los intereses del grupo como su identidad colectiva”* (Ibarra, 2000: 275).

En este sentido, los intentos integradores de los diferentes modelos (McAdam, Tilly & Tarrow, 1996; McAdam, McArthy & Zald, 1999; Diani & Della Porta, 1997; Klandermans & Tarrow, 1998) permiten establecer un modelo de análisis que se fundamente en 3 tipos de variables: a) la estructura de oportunidad política, b) los repertorios organizativos, y c) el análisis del discurso y la identidad colectiva¹.

- La estructura de oportunidad política constata la influencia del entorno sobre el movimiento social: *“los movimientos sociales adoptan una u otra forma dependiendo de una amplia gama de oportunidades y constricciones del contexto (nacional) en el que se inscriben”* (McAdam, McArthy & Zald, 1999: 24).
- Las estructuras de movilización tratan de analizar la dinámica organizacional de los movimientos sociales, a partir de un análisis comparado de las infraestructuras organizativas que permite comprender los patrones históricos de

¹ Estos son los elementos que se analizan en la asignatura de Cambio y Conflicto político, optativa de 4º curso del Grado de Ciencia Política y Gestión Pública y que permiten operacionalizar el concepto de acción colectiva que en este modelo, tal y como hemos presentado en el Tema 1, permite la mediación entre actores y estructuras

movilización prediciendo en qué lugares hay más posibilidades de que surjan movimientos sociales. A su vez, se centra en la caracterización de las relaciones entre una forma organizativa y un tipo de movimiento. Y permite determinar la influencia de las estructuras estatales y la cultura organizativa concreta sobre los movimientos.

- Finalmente, el estudio de los procesos de enmarcado aborda la tercera de las dimensiones necesarias para explicar este tipo de acción colectiva, centrándose en las formas en que surgen, se mantienen, adaptan al entorno y modifican internamente las identidades que permiten aglutinar a los individuos que forman parte del movimiento, motivándoles a desarrollar una acción colectiva, en ocasiones contenciosa.

En definitiva, nos encontramos ante una aproximación que permite vincular a la dimensión micro de los movimientos sociales –ámbito de las motivaciones individuales- las perspectivas meso –organización y estructura interna- y los elementos macro –aspectos estructurales-.

Una definición de movimientos sociales.

La diferenciación conceptual realizada por Letamendia & Ibarra (1999) entre movimientos sociales, grupos de interés y partidos políticos delimita las características de los primeros en base a su orientación hacia el poder político, las relaciones con los partidos, su organización, los intereses y grupos representados, los medios de representación, el tipo de acción colectiva, la estrategia y los objetivos finales. De esta forma, se define a los movimientos sociales como una “*red de interacciones informales entre individuos, grupos y/o organizaciones que, en sostenida y habitualmente conflictiva interacción con las autoridades políticas, elites y oponentes –compartiendo una identidad colectiva en origen diferenciada pero con tendencia a confundirse con identidades convencionales del “mundo exterior”-, demandan públicamente cambios*

(sólo en potencia anti-sistémicos) en el ejercicio o redistribución del poder a favor de intereses cuyos titulares son indeterminados e indeterminables colectivos o categorías sociales” (Letamendia & Ibarra, 1999: 400).

Por su parte, Riechmann y Fernandez Buey (1999: 61-67) presentan varios rasgos que permiten caracterizar a la familia de movimientos sociales que hemos definido como nuevos movimientos sociales: a) la vocación emancipatoria, b) su situación intermedia entre los movimientos con orientación al poder y los culturales, aunque con tendencia a concentrarse en esta esfera socio-cultural, c) una propensión anti-modernista, al no compartir la concepción lineal de la historia o la creencia en el progreso entendido como desarrollo material y moral indeterminables, d) su composición social heterogénea, e) unos objetivos y estrategias de acción muy descentralizados, f) una estructura organizativa descentralizada y anti-jerárquica, g) la politización de la vida cotidiana y el ámbito privados, y h) los métodos de acción no convencionales.

En cualquier caso, como veremos, es importante establecer una diferenciación terminológica. Ambas definiciones de movimientos sociales los entienden desde una perspectiva amplia, como redes de actores. En este sentido, se hace necesario desligar el concepto de movimiento social del de las organizaciones del movimiento social. El conjunto de estas organizaciones (movimientos sociales organizados) conforman la infraestructura de un movimiento social en sentido amplio (Kriesi, 1999). La suma de las partes constituye el todo en un determinado contexto temporal y geográfico.

4.4. Los movimientos sociales y la sociedad civil

Cohen y Arato son claros y contundentes respecto al papel de los movimientos sociales en la sociedad civil: “nuestra tesis es que los movimientos sociales constituyen el elemento dinámico en procesos que podrían convertir en realidad los potenciales positivos de las sociedades civiles modernas” (Cohen y Arato, 2002: 556).

Su abordaje es clave para nuestro modelo, en la medida en que como ellos señalan, su interés no es la definición de los movimientos sociales *per se*, sino más bien la relación entre acción colectiva contemporánea y la sociedad civil. Así, Cohen y Arato tratan de perfilar un acercamiento a los movimientos sociales capaz de superar las limitaciones de los modelos clásicos de análisis, centrados unos en la dimensión más estratégica de la acción de los movimientos sociales, y otros en su orientación identitaria.

Previamente, no obstante, tratan de asentar un abordaje basado en el elemento novedoso de los movimientos sociales respecto de la acción colectiva, que vinculan con una estrategia que abandona los sueños revolucionarios a favor de una reforma radical que no se orienta, ni necesaria ni principalmente, hacia el Estado: *“llamaremos “radicalismo autolimitado” a los proyectos para la defensa y democratización de la sociedad civil que aceptan la diferenciación estructural y reconocen la integridad de los sistemas políticos y económicos”* (ibíd., 557).

Desde estas premisas, Cohen y Arato pasan a describir las formas de acercamiento clásicas a los movimientos sociales, mostrando sus limitaciones. Así, en un primer momento, se detienen en el análisis de las teorías de la movilización de recursos, que se centran en el estudio de variables “objetivas” como la organización, los intereses, los recursos, las oportunidades, las estrategias etc., para explicar movilizaciones a gran escala. Se trata, pues, de un modelo para el que variables como la organización y la racionalidad son claves. A su juicio, acercamientos que analizan, como el de Tilly, tienen la virtualidad de mostrar indirectamente que la acción colectiva moderna presupone el desarrollo de espacios autónomos dentro de las sociedades civil y política, que se garantizan por derechos apoyados por la cultura política democrática que subyace a las instituciones representativas formales. El problema, señalan, es que este autor *“pone el énfasis principalmente en las oportunidades políticas y en las implicaciones estratégicas que aquellos tienen para la emergencia del repertorio de acciones del siglo XIX”* (ibíd., 566).

En resumen, solo observa las dimensiones de los procesos que son relevantes para la movilización de grupos organizados que compiten por el poder. El trabajo histórico de Tilly implica que la transformación de los espacios del poder y los correspondientes

cambios en la acción colectiva presuponen la creación de nuevos significados, nuevas organizaciones, nuevas identidades y un espacio social (es decir, la sociedad civil) en el cual estos puedan aparecer. Pero la perspectiva de la movilización de recursos que él acepta, le lleva a tratar estos últimos meramente como precondiciones obvias para la acción colectiva efectiva. Los modelos (...) enfocan la atención a la interacción entre represión/facilitación, poder y oportunidad/amenaza por una parte, y los intereses, la organización y la movilización de las capacidades por otra. Se presupone que la acción colectiva supone costos y trae beneficios en forma de bienes colectivos. Se representa la lucha como si se diera entre miembros y competidores por la inclusión en el sistema de organización política (acceso al poder) y por las recompensas materiales que esto puede traer consigo. En resumen, los conflictos sociales (en y acerca de las instituciones de la sociedad civil) y la forma de la esfera pública política son considerados sólo unilateralmente: como reacciones defensivas y ofensivas a las cambiantes relaciones de poder (ibíd.).

Entre las desventajas de este acercamiento, Cohen y Arato destacan que este modelo no tiene en cuenta, por ejemplo, que la creciente autorreflexión respecto a la construcción social de la identidad y la realidad supone un aprendizaje que sigue dimensiones que no son estratégicas, de forma que este enfoque excluye la posibilidad de analizar las políticas de identidad que impregnan a los actores colectivos contemporáneos. En paralelo, su insistencia en la lógica del poder lleva a estos autores a oscurecer las consecuencias de la política de la influencia dirigida a la sociedad política. Al contrario, apuntan, su tesis es que *“una política dual de identidad e influencia, dirigida tanto a la sociedad civil como al sistema de organización político (o sociedad política), reemplaza a la lógica monista de la acción política identificada por Tilly”* (ibíd., 567).

La teoría de la movilización de recursos se ve limitada en general por su concentración en el poder para tratar el tema de los usos estratégicos de la influencia. En otras palabras, el enfoque se centra en la expansión de la sociedad política para incluir nuevos actores o aumentar el poder de los antiguos. Ciertamente, ésta es una dimensión importante de la acción colectiva contemporánea, como lo es el éxito definido en términos de la inclusión en el sistema de la organización política y en términos de mayores beneficios. Pero esto difícilmente es toda la historia. Un enfoque orientado

hacia la sociedad civil puede destacar dos dimensiones adicionales de la acción colectiva contemporánea: la política de la influencia (de la sociedad civil en la sociedad política) y las políticas de identidad (en enfoque en la autonomía, la identidad y la democratización de las relaciones sociales por fuera del sistema de organización política). (ibíd., 571)

Tras dar por sentado que la relación de las estructuras no es únicamente unidireccional (de arriba a abajo), sino bidireccional (también de abajo a arriba), estos autores se detienen en el análisis de las teorías sobre la identidad, que muestran la cierta autonomía de la que goza el devenir de la variable de los actores. Así, en un segundo momento, Cohen y Arato analizan los rasgos del modelo europeo de análisis de los movimientos sociales, que prima la dimensión de la integración social en la acción colectiva, prestando especial importancia a la identidad. Para ello, en primer lugar describen los postulados principales del trabajo de Touraine, para tratar de trascenderlo. Ciertamente, de este autor asumen la relevancia que aporta a las estrategias defensivas de la sociedad civil, que tratan de garantizar su autonomía frente al Estado. Pero, en paralelo, acuerdan con éste que lo que está en juego en la acción de los movimientos sociales no es solo esta dimensión defensiva, sino también, y sobre todo, la definición de qué clase de sociedad civil es la que debe defenderse. *“Más bien, los movimientos sociales deben esforzarse por defender y democratizar todas aquellas instituciones de la sociedad civil en las que se ha hecho visible y se ha desafiado la discriminación, la desigualdad y la dominación (...) En resumen, sería un gran error apoyar sólo el proyecto liberal de defender a la sociedad frente al estado, porque esto dejaría intactas las relaciones de dominación y de desigualdad dentro de la sociedad civil”* (ibíd., 579). Precisamente por ello, la clave de la acción de los movimientos sociales está en su capacidad de transformación de las estructuras culturales.

El aumento de la autorreflexión (...) rige el cambio en la identidad de las acciones colectivas y las clases de movimientos que se desarrollan. La lucha por instituciones sociales autónomas, democráticas, y el interés en formas participativas de acción por parte de los movimientos sociales contemporáneos, se deben al reconocimiento de que los medios y los fines de la reproducción social son productos sociales. Por esto es que

se concentran en las dimensiones culturales y normativas de la vida diaria y conciben sus luchas en términos del derecho de la población a elegir su propia clase de vida e identidad. Las nuevas dimensiones de identidad de los actores contemporáneos y lo que hace que sean radicalmente discontinuos respecto a los movimientos anteriores, no es por lo tanto su repertorio de acciones, sino el nivel de autorreflexión y el cambio en el lugar y en los intereses de las luchas que corresponden a la emergencia de un nuevo tipo societal” (ibíd., 580).

En cualquiera de los casos, Cohen y Arato observan que el modelo de Touraine dificulta la comprensión de la estrategia de influencia en la que ellos ponen tanta atención. Así, siguiendo de nuevo a Habermas, identifican varias lógicas de la acción colectiva. La primera sería la “acción teleológica”, que presupone que un actor elige recursos alternativos de acción (medios) con vistas a obtener un fin. De esta forma, la acción teleológica corresponde al concepto de acción racional que se encuentra en el centro de la teoría de la movilización de recursos. Por otra parte, tendríamos otro tipo de acción, la “acción representada”, que encaja con las premisas del modelo puro de identidad en el análisis de los movimientos sociales. Se trata de un tipo de acción que implica la fabricación intencional y expresiva de la subjetividad de la persona, así como su manifestación (en forma de sentimientos, identidad, etc.) a un conjunto de otros que conforman su público.

Ello implica que son necesarias dos relaciones: una orientada al mundo subjetivo del actor, y otra orientada al mundo externo: *“la dimensión de la acción colectiva que abarca la afirmación expresiva de una identidad no es, por lo tanto, un asunto de expresividad espontánea sino que implica una representación estilizada y planificada de la identidad propia con el fin de obtener reconocimiento o influencia”* (ibíd., 583). Por otra parte, argumentan que las elaboraciones de Smelser sobre movimientos sociales orientados normativamente remiten al concepto de “acción normativa” de Habermas; es esta una acción en la que los integrantes de un grupo orientan sus acciones a valores comunes (institucionalizados) que tienen una fuerza obligatoria general para las relaciones interpersonales. De esta forma, las normas pueden ser

evaluadas en términos de si merecen o no ser reconocidas y aceptadas. Finalmente, la “acción comunicativa”, apuntan, lleva más lejos este cuestionamiento de las normas, ya que esta acción comunicativa se refiere a un proceso intersubjetivo, mediado lingüísticamente, por el que los actores establecen relaciones interpersonales y coordinan sus acciones, y que implica la negociación de las definiciones de las normas y el logro de un acuerdo.

Desde esta perspectiva, concluyen, *“es perfectamente concebible que los movimientos sociales puedan comprometer a todas estas formas de acción”* (ibíd., 584). Así, tratando de sortear las limitaciones de los modelos clásicos de análisis de los movimientos sociales, Cohen y Arato comienzan afirmando que *“los nuevos movimientos sociales consideran a los modelos culturales, las normas y las instituciones de la sociedad civil como los principales elementos en juego en el conflicto social”*. En paralelo, *“claramente, los esfuerzos por influir en las estructuras económicas y en la política de estado también tienen un importante papel en estos movimientos”*.

Su acercamiento sobre el papel de los movimientos sociales, como no podría ser de otra forma, se apoya en tres tesis elaboradas por Habermas. La primera, anuncia que la emergencia de la modernidad cultural lleva consigo un potencial para la mayor autorreflexión respecto de las dimensiones de la acción y de las relaciones con el mundo; cuestión que abre la puerta a un acercamiento postradicional, permitiendo procesos autónomos de interacción comunicativa entre la vida social, política y económica. La segunda tesis, la de la institucionalización selectiva de los potenciales de la modernidad lleva a un modelo dual de sociedad que permite distinguir entre mundo de la vida y sistemas, en base al que se diferencian los procesos implicados en la racionalización del Estado y la economía de los del mundo de la vida. No obstante, como sabemos, la lógica de los sistemas impregna al mundo de la vida, de forma que se ha empobrecido la promesa de desarrollo del mundo de la vida. Sin embargo, la tercera de las tesis insiste en el carácter bilateral de las instituciones de nuestro mundo de la vida, de forma que se entiende que la racionalidad societal ha permitido desarrollos institucionales de la sociedad civil que incluyen no solo la dominación, sino también las

bases para la emancipación. De esta forma, se soslaya el callejón sin salida entre los acercamientos que ponen excesivo énfasis en la enajenación, en línea con las aportaciones de Foucault y los acercamientos que ponen excesivo énfasis en los procesos de integración, en línea con las tesis de Parsons.

Si las sociedades modernas no son reificadas del todo, si nuestras instituciones no han sido penetradas totalmente por las relaciones de poder desiguales, entonces es posible pensar en términos potenciales positivos de la modernidad que vale la pena defender y ampliar por medio de una política radical, pero autolimitada. Consideramos junto con la tesis de la colonización del mundo de la vida, esto nos permiten explicar la razón de que la sociedad civil contemporánea sea el objetivo, así como el terreno de la acción colectiva contemporánea. En conjunto, estas tesis revelan los elementos importantes de los movimientos contemporáneos en su lucha por la destradicionalización y democratización de las relaciones sociales de la sociedad civil (ibíd., 587).

Concretamente, siguiendo la primera parte del último argumento, Cohen y Arato se desmarcan de la visión de Habermas, que observa en los movimientos sociales estrategias únicamente defensivas, o de retirada a valores tradicionales (lo que podría vincularse con las identidades de resistencia de Castells). Más al contrario, en su perspectiva, esta ni es la única dimensión (la defensiva) ni debe ser entendida en términos de vuelta a la tradición, sino en términos de destradicionalización y democratización, lo que vincula la perspectiva de Cohen y Arato de los movimientos sociales a partir de las lógicas de las identidades proyecto de Castells. Más concretamente, como refleja esta larga cita, los movimientos sociales, en su doble orientación defensiva y ofensiva, activan diversas estrategias políticas: de identidad, de inclusión, de influencia y de reforma:

La redefinición de las normas culturales, de las identidades individuales y colectivas, de los papeles sociales adecuados, de los modos de interpretación y de la forma y el contenido de los discursos (a la que aquí hemos denominado “política de identidad”) es parte de este proyecto [de destradicionalización y democratización]. Sin embargo, como las instituciones autoritarias frecuentemente son reforzadas por el control desigual del

dinero y el poder, y como la colonización de las instituciones sociales por estos medios impide continuar con su modernización, los actores colectivos contemporáneos también deben dirigirse a la sociedad política. Una “política de inclusión” se dirige a las instituciones políticas para obtener reconocimiento para nuevos actores políticos como miembros de la sociedad política y para lograr beneficios de aquellos a los que representan [cuestión que estaría en la base del surgimiento de formaciones políticas nacionalistas, ecologistas o feministas, por ejemplo]. También es indispensable una “política de influencia” dirigida a cambiar el universo del discurso público para que genere espacios para nuevas interpretaciones de necesidades, para nuevas identidades y para nuevas normas (...). Finalmente, la democratización adicional de las instituciones políticas y económicas (una “política de reforma”) también es central para este proyecto. Sin este esfuerzo, cualquier progreso dentro de la sociedad civil sería una realidad tenue (ibíd., 588).

Rechazan, en paralelo, la visión anti institucional con la que Habermas asocia a los movimientos sociales. Al contrario, creen que estos movimientos sociales generan nuevas solidaridades, alteran la estructura asociativa de la sociedad civil y crean una pluralidad de nuevos espacios públicos, a la vez que amplían y relativizan los espacios que ya están institucionalizados. En consecuencia, la acción colectiva contemporánea supone el cambio institucional, pero a partir de una orientación basada en la integración social.

En definitiva, su incidencia en el elemento defensivo de los movimientos sociales se asienta en la necesidad de conservar y alimentar la estructura comunicativa del mundo de la vida. La expresividad, la identidad, los relatos tienen sentido desde esta perspectiva; pero también los esfuerzos por lograr cambios institucionales dentro de la sociedad civil que correspondan con los nuevos significados, identidades y normas que se crean. En paralelo, el aspecto ofensivo de los movimientos sociales se dirige a la sociedad política y económica, lo que implica el desarrollo de organizaciones capaces de ejercer presión e influencia para que se les incluya en estos dominios pudiendo obtener beneficios de ellos. En esta perspectiva, los modos estratégicos instrumentales de acción colectiva cobran su virtualidad. En resumen, su reconstrucción de la

distinción sistema/mundo de la vida, de conformidad con los lineamientos de una teoría de la sociedad civil permite, por una parte “traducir el concepto de mundo de la vida como articulación institucional de una sociedad civil garantizada por derechos”. De otra parte, *“argumentamos que hay receptores para la influencia de la sociedad civil dentro de la sociedad política y económica y que éstos pueden, dentro de ciertos límites, ser ampliados y democratizados”*

En consecuencia, en nuestra versión de la concepción dual de la sociedad, la lógica dual de los nuevos movimientos puede hacerse evidente. Nuestro enfoque permite ver que los movimientos operan a ambos lados de la distinción sistema/mundo de la vida, y así podemos tener en cuenta las contribuciones de ambos paradigmas de la acción colectiva [el instrumental racional, de una parte, y el de la identidad, de otra] (ibíd., 592).

3.5-. La estrategia de los movimientos sociales en la práctica

A lo largo de estas páginas hemos tratado de dotar de contenido a la variable de los actores a partir del concepto de sociedad civil elaborado por Cohen y Arato. Sin embargo, en aras de una mejor comprensión de las dinámicas de cambio y conflicto, y apoyados en el aparato teórico de ambos autores, hemos identificado a los movimientos sociales cómo el actor privilegiado de la sociedad, en la medida en que éstos visualizan claramente la doble lógica que articula el tratamiento de las variables de este esquema (autonomía de cada variable y recíproca influencia entre las variables).

- Así, la importancia de las estrategias defensivas, que se centran en la institucionalización de la sociedad civil y en la vertebración identitaria de la misma, permite visualizar cómo los actores presentan ciertas lógicas autónomas - aunque claramente condicionadas, como no podría ser de otra forma, por las afecciones estructurales (que asociamos con la colonización del mundo de la vida por los sistemas)-.

- Pero, en paralelo, la estrategia de la influencia presente en los movimientos sociales, especialmente, nos permite visualizar cómo a partir de la institucionalización y generación de un “nosotros” en términos deliberativos (eje de la autonomía de los actores de la sociedad civil, que los diferencia de las organizaciones del sistema político y económico, que como hemos apuntado deben ser tratados en la variable estructural), los actores también pueden influir en las estructuras, bien ampliando la comunidad política a nuevos públicos, bien modificando las decisiones del sistema político.

Hemos apuntado cómo uno de elementos novedosos de este abordaje es precisamente el que tras las estrategias de los movimientos sociales se esconde un horizonte de “radicalismo utópico autolimitado”. Sin embargo, hasta este momento, nos hemos movido en un terreno a medio camino entre lo normativo y lo especulativo. Por eso, creemos que es el momento de acercar aún más el prisma al análisis de las estrategias de los actores, como paso previo para abordar la última de las variables de este esquema, la de la acción colectiva.

Por ello, nos detendremos brevemente para analizar los rasgos de unas formas de acción colectiva (que suponen la aplicación práctica del acercamiento de Cohen y Arato) a la que estamos asistiendo desde hace varias décadas, pero que recientemente se están haciendo claramente explícitas e incluso se están difundiendo a todos los rincones del planeta. En consecuencia, trataremos de aplicar las tesis principales sobre las que articulado el tratamiento de la variable de actores, pero desde una perspectiva práctica.

Concretamente, este acercamiento práctico -que trata de visualizar el potencial explicativo del modelo adoptado en las movilizaciones que han derrocado regímenes autoritarios recientemente- se sostiene en el análisis de una obra elaborada por Gene Sharp (*De la dictadura a la democracia*) (2010), que se ha convertido en un texto de referencia para los colectivos contenciosos de todo el mundo cuyas directrices están aplicando amplios sectores de la población con un relativo éxito en los procesos de cambio de régimen y/o democratización que están aconteciendo tanto en países del Este

(especialmente las pasadas décadas) como en países árabes (desde 2012). Pero, más aún, creemos que estas orientaciones (que insistimos, en la medida en que son eficaces -y lo son- demuestran la aplicabilidad del modelo elaborado por Cohen y Arato en la praxis) se han difundido más allá de contextos de democratización (o de luchas por el derrocamiento de las dictaduras) a movimientos que buscan la profundización de las instituciones democráticas en los regímenes liberales occidentales (por ejemplo en movimientos como el 15-m o, genéricamente, en los colectivos de “indignados” europeos y americanos).

Como veremos a continuación, las sencillas orientaciones que presenta Sharp remiten directamente a estrategias factibles que buscan hacer operativos los dos requisitos de acción definidos por Cohen y Arato: la lógica defensiva, orientada a la vertebración de la sociedad civil términos organizativos y prácticos; la ofensiva, orientada a influir en el sistema de la forma más acabada -y la única posible si el horizonte es la democratización en países sometidos a regímenes dictatoriales-: derrocándolo.

Este horizonte rupturista -que no está presente de forma tan nítida en los movimientos sociales que se están activando en los regímenes democráticos- no invalida la tesis de la “utopía autolimitadora de los movimientos sociales” planteada por Cohen y Arato. Más al contrario, la lógica de “autolimitadora” está en el centro de todos estos movimientos, independientemente de que su objetivo último sea derrocar un régimen o no. Se trata, en nuestra perspectiva, de una lógica autolimitadora que en estos movimientos democratizadores se hace obvia no tanto en el horizonte (que Cohen y Arato, por centrarse en el papel de los movimientos sociales en las democracias liberales identifican con un consenso que acepta de forma más o menos obvia las reglas de juego), como en el camino: en la estrategia a desarrollar, concretada en una apuesta por la utilización de la desobediencia civil como mecanismo privilegiado -sino único- del cambio.

Precisamente, Cohen y Arato finalizan su obra acercándose a la desobediencia civil, considerando que ésta se mueve a medio camino de la insurrección violenta y la

actividad política institucionalizada, en línea con los planteamientos de Bobbio (1997). Por ello, los actos de desobediencia civil son ejemplos extraordinariamente nítidos de “radicalismo autolimitado” en las sociedades liberales y occidentales.

Por definición, la desobediencia civil es extrainstitucional: un derecho legal para participar en la desobediencia civil es autocontradictorio. Pero no por ello viola los principios de la sociedad civil. Más bien, la acción política directa en forma de desobediencia civil mantiene vigente el horizonte utópico de una sociedad civil democrática y justa (...) Los practicantes de la desobediencias civil extienden el rango de la actividad ciudadana legítima -aunque inicialmente fuera extralegal-, aceptada en una determinada cultura política. (...) Así la desobediencia civil inicia un proceso de aprendizaje que expande el rango y las formas de participación abiertas a los ciudadanos privados dentro de una cultura política madura. Además (...) ha sido motor de creación y expansión de derechos y de democratización. Por otra parte, la desobediencia civil define los límites externos de la política radical dentro de la estructura general de las sociedades civiles. Acepta los principios básicos de un gobierno constitucional. [pero también] la integridad del constitucionalismo depende de una cultura política que acepte el carácter valioso y normativo de la acción colectiva ilegal en forma de desobediencia civil (Cohen y Arato, 2002: 639).

En última instancia, la desobediencia civil es un mecanismo de influencia en las sociedades liberales que, a la par, ni rompe con las lógicas del sistema, ni rompe con la dimensión deliberativa de la sociedad civil (Habermas, 2000).

Ahora nos detendremos en el papel que la desobediencia civil juega en los procesos de transición a la democracia. Así, trataremos de responder a una serie de preguntas como, por ejemplo, ¿qué sentido tiene la práctica de la desobediencia civil en el caso de dinámicas de conflicto en regímenes no democráticos? ¿cuál es el valor añadido de la desobediencia civil en este tipo de regímenes? ¿en qué medida la desobediencia civil se relaciona con la doble dimensión ofensiva y defensiva de los movimientos sociales en este tipo de contextos? En definitiva, ¿cuál es la estrategia de los movimientos que en 2012 se enfrentaban a sistemas dictatoriales y qué papel juega la táctica de la

desobediencia en esta estrategia defensiva y ofensiva que tiene como horizonte el cambio de régimen?

La virtualidad de la obra de Gene Sharp a la hora de encarar estos retos, como hemos señalado, es que, precisamente, sus recomendaciones que ya han sido aplicadas con éxito en Georgia, Ucrania, Tayikistán, Túnez y, con menor éxito, en Egipto; ello nos permite visualizar cómo el modelo elaborado por Cohen y Arato, y que hemos adoptado para operacionalizar la variable de los actores, se concreta en la práctica. Y no en cualquier contexto: precisamente en el peor de ellos, el marcado por la presencia de regímenes dictatoriales. Además, estas estrategias que se apoyan en el modelo elaborado por Sharp, se está convirtiendo en una referencia ineludible, en una guía para la acción de los actores contenciosos en todos los rincones del planeta, no solo en los dictatoriales.

En consecuencia, desgranaremos las ideas más importantes del trabajo de Sharp, en un triple sentido: en primer lugar, analizaremos las potencialidades de la desobediencia civil así como su sintonía con la lógica deliberativa del mundo de la vida; en segundo lugar, analizaremos las estrategias defensivas que Sharp recomienda como punto de partida para el cambio de régimen; finalmente, analizaremos las estrategias ofensivas que propone para lograr el debilitamiento de la capacidad del régimen, como primer paso para lograr su colapso final.

Debe quedar claro, no obstante, que en este momento, el objetivo de las siguientes páginas no es tanto analizar los contornos de uno de los repertorios concretos de la acción colectiva, como mostrar qué papel juega la desobediencia civil, o más concretamente, el desafío político masivo (en palabras de Sharp) en las modificaciones estructurales en regímenes no democráticos. Y es que, como veremos, detrás de todo su argumento hay una preocupación central: la importancia que para la caída de una dictadura tiene el debilitamiento de las capacidades del régimen.

Ciertamente, como ya analizamos cuando abordamos la variable estructural, existe una relación vertical que vincula los cambios en la capacidad del régimen con las

modificaciones en la acción colectiva, es decir, con las estrategias ofensivas de los actores. Por citar un simple ejemplo, las transformaciones en la capacidad del régimen franquista a comienzos de la década de los 60, ligadas a las necesidades estructurales de la dictadura de ganar en eficiencia económica y en reconocimiento internacional con la apuesta por abandonar la dinámica autárquica anterior, se concreta en una serie de iniciativas liberalizadoras que permiten la vertebración de la sociedad civil española, como primer paso a una posterior dinámica ofensiva que eclosiona claramente a finales de esta década (Ahedo, 2012b). Así, la ley de asociaciones de 1964 permitirá el nacimiento de un potente movimiento vecinal que pocos años después se situará en el centro de la ofensiva antifranquista. De igual forma, los cambios en la legislación laboral y en la representación sindical van a permitir la emergencia de experiencias asamblearias de trabajadores que son el embrión del nacimiento de Comisiones Obreras. A su vez, cierta liberalización en el plano cultural -concretada en la petición de los diputados vasco-navarros para el reconocimiento de las lenguas minoritarias- abre la espita para el surgimiento de potentes movimientos musicales (Ez Dok Hamairu) y culturales (como el incipiente movimiento de las ikastolas) en Euskadi.

En cualquiera de los casos, este acercamiento, aunque presenta la potencialidad de mostrar cómo los cambios en la capacidad alimentan la lógica defensiva y ofensiva de la sociedad civil, se muestra insuficientemente unidireccional, al ocultar la posibilidad de que la relación entre capacidad y sociedad pueda ser bidireccional. Dicho de otra forma, más allá de la relación jerárquica top-down entre capacidad estructural y acción colectiva ofensiva, es fácil identificar en los análisis empíricos de procesos de transición otra relación: la que vincula los cambios en la capacidad de los regímenes dictatoriales con la dimensión defensiva de los actores. Así las cosas, siguiendo el anterior ejemplo, es claro cómo desde la perspectiva bottom-up, la vertebración comunitaria en el plano vecinal, cultural y sindical que permiten la liberalización del régimen franquista, es el punto de partida de una estrategia ofensiva que paulatinamente va reduciendo la capacidad del régimen para controlar la sociedad. En última instancia, los actores, con sus acciones, pueden modificar las estructuras.

Justamente, ésta es la cuestión central de la obra de Sharp: mostrar que la sociedad civil tiene recursos para debilitar las capacidades de los regímenes dictatoriales, de tal suerte que si ésta llega a reducirse a la mínima expresión, el derrocamiento del régimen será inevitable. En consecuencia, para Sharp, el fundamento del desafío político masivo es hacer vivible la retirada de la obediencia al régimen, con el corolario del debilitamiento de sus fuentes de poder.

Y ésta, no es una cuestión baladí. Precisamente, la mayor o menor incidencia de la sociedad civil a la hora de limitar las capacidades de los regímenes dictatoriales es la cuestión que, a nuestro juicio, explica las derivadas contradictorias que se han hecho visibles en Egipto y Túnez de un lado, y en Libia y Siria de otro. Consideramos que aunque en los cuatro casos el punto de partida de las movilizaciones ha sido la lógica del “radicalismo autolimitado” que Cohen y Arato atribuyen a los movimientos sociales vertebradores de la sociedad, utilizando para ello la estrategia de la desobediencia civil, precisamente la importancia de las dinámicas previas a la implosión de la primavera árabe (derivada de la apertura de la estructura de oportunidad en Túnez y a su difusión a todos los países árabes) en estos países, concretados en un trabajo lento pero implacable de erosión de la capacidad del régimen en Túnez y Egipto explica el contraste entre las derivadas que se han dado estos casos y los de Libia y Siria.

Creemos que allí donde la sociedad civil -además de las afecciones de otras estructuras, como las económicas, geoestratégicas o culturales- ha desarrollado dinámicas previas que han limitado la capacidad del régimen, se han logrado cambios políticos significativos relativamente incruentos. Precisamente, la previa vertebración de la comunidad, paralela a dinámicas graduales y efectivas de desgaste de la capacidad de los regímenes, es lo que explica por qué en unos casos se ha logrado la caída del sistema político (Túnez), y en otro solo la salida del dictador (Egipto). Por el contrario, intuimos que la limitación de las estrategias previas de desgaste en otros países que se han visto sacudidos por la difusión de la ola de contestación iniciada en Túnez, como es el caso de Libia o Siria, explican las derivadas divergentes que estos procesos han tomado comparados con los casos anteriores. Así, una alta capacidad relativamente intacta en el

caso Libia explica la respuesta brutal del régimen contra las manifestaciones pacíficas, imposibilitando una estrategia de desafío político masivo (de carácter no violento). Pronto, se hace visible que la única vía para los desafiadores es la militar, conduciendo en este caso a una guerra. No obstante, el desenlace de ésta, que solo finaliza con la intervención desde el exterior, es explicable nuevamente por debilidad de las fuerzas opositoras. Finalmente, los conflictos violentos que se han abierto entre las facciones “victoriosas” de la época post-Gafadi refuerzan la percepción de que no se había dado un proceso previo de vertebración de la sociedad civil, lo que unido a los efectos perversos de la utilización de una violencia que rompe con la lógica deliberativa de esta esfera, explica la compleja situación actual que se da en Libia. Finalmente, la altísima capacidad del régimen Sirio, la débil articulación de la sociedad civil, y la falta de aliados que fortalezcan a los rebeldes y debiliten el régimen, explica que las demandas de la población se ahoguen con una auténtica masacre en cuanto comienzan las movilizaciones.

3.6.- El desafío político masivo y la debilitación de los regímenes dictatoriales

Gene Sharp define la estrategia de derrocamiento de regímenes dictatoriales por la sociedad civil con el concepto de “desafío político masivo”, entendido como “*confrontación no violenta (protesta, no colaboración e intervención) que se lleva a cabo de una manera desafiante y activa, con fines políticos*” (2010: 1). Se trata de un concepto, en consecuencia, que no deja lugar a dudas de la voluntad rupturista hacia el que se dirige: el derrocamiento total de los regímenes dictatoriales y la instauración de un sistema democrático. Así, el término “*desafío*” expresa una deliberada y pública provocación dirigida hacia la autoridad “*mediante la desobediencia civil y no deja lugar a la sumisión*”. En paralelo el concepto “*desafío político*” describe el entorno en el que se emplea la acción (político), así como el objetivo (el poder político): “*se usa principalmente para describir la acción realizada por la población para retomar de*

manos de la dictadura el control de las instituciones gubernamentales mediante el constante ataque a las fuentes de poder y el uso deliberado de la planificación estratégica y de las operaciones para alcanzarlo” (ibíd.).

Como vemos, desde el primer momento, no solo se define el objetivo (derrocar la dictadura), sino también un método de acción colectiva: la desobediencia civil masiva. A la hora de justificar esta opción, Sharp no remite a dimensiones éticas o morales, sino que sus argumentos son fundamentalmente estratégicos. Así, su texto se convierte en un argumentario práctico que no pretende convencer la de bondad moral de la desobediencia civil frente a otras estrategias, sino que se centra precisamente en relativizar las supuestas virtualidades tácticas y estratégicas de la acción violenta en el derrocamiento de regímenes dictatoriales de una parte, y en destacar, de otra, los costes que esta opción supone a corto plazo (durante los procesos revolucionarios violentos) y a medio plazo (en la debilidad de las democracias alcanzadas por la vía violenta).

Así, apunta en primer lugar que aunque se han producido importantes logros a lo largo de la historia con las estrategias violentas, *“en pocas ocasiones” éstas “han permitido que esos pueblos alcanzaran la libertad”*. Más al contrario, considera que estas estrategias violentas han desencadenado brutales represiones que *“han dejado a la población más indefensa”* que antes del inicio del conflicto. En este sentido, Sharp considera que la utilización de la violencia es un error estratégico en la medida en que se escoge un instrumento de lucha en el que, precisamente, *“los opresores casi siempre tienen la superioridad (...) Los dictadores casi siempre tienen superioridad militar, en cuanto a cantidad de armamentos, pertrechos, transporte y tamaño de las fuerzas armadas. A pesar de su valentía, los demócratas no pueden emparejarseles (casi) nunca”*. Rechaza, en paralelo, la estrategia de la guerra de guerrillas, que se activa cuando la insurrección armada se hace inviable: por el número de bajas que genera en la población civil; por su duración en el tiempo; y sobre todo *“porque no ofrece ninguna garantía frente a la posibilidad del fracaso”*. Más al contrario, a su juicio, la guerra de guerrillas puede permitir al régimen reforzar su legitimidad e incluso reubicar a la

población bajo su paraguas como consecuencia del “*inmenso sufrimiento humano y trastorno social que conlleva*” (ibíd., 5).

Pero, más allá de estas consideraciones tácticas, otra dimensión del argumento de Sharp encaja como un guante de terciopelo con las consideraciones de Cohen y Arato sobre la sociedad civil, al considerar que frente a la apuesta desobediente, la violencia, incluso aunque resulte victoriosa, presenta considerables consecuencias “*en lo estructural*”

Si finalmente gana la guerrilla, el nuevo régimen que de ella provenga es con frecuencia más dictatorial que el anterior, debido al impacto centralizador de las fuerzas militares al expandirse, y por el debilitamiento o la destrucción durante la lucha de los grupos e instituciones independientes de la sociedad; cuerpos que son vitales para establecer y mantener después una sociedad democráticas. Los que se opongan a las dictaduras deben buscar otra opción (ibíd.).

En definitiva, la asunción de un modelo de lucha articulado por la lógica del poder rompe con la racionalidad deliberativa de la sociedad civil, extendiéndose sus consecuencias desintegradoras, en caso de victoria de los grupos insurrectos, al nuevo régimen que se instaura. Por el contrario, en la perspectiva de Sharp, el desafío político masivo presenta una serie de efectos democratizadores; es decir, en términos de Arato y Cohen, no solo no rompe con la racionalidad deliberativa propia del mundo de la vida, sino que incluso la refuerza en aquellos contextos dictatoriales en los que su colonización por el sistema político es más acabada, al carecer de barreras institucionalizadas en forma de derechos. Así, considera que esta estrategia desobediente tiene un efecto negativo desde el punto de vista estratégico, ya que en contraste con los medios violentos, esta técnica permite que los líderes de un movimiento de desafío político puedan influir en o presionar a sus seguidores, pero no permite que los repriman si rechazan su dirección, si disienten o escogen otros líderes. No obstante, en última instancia, esta limitación estratégica, es una potencialidad desde un punto de vista normativo, en la medida en que, precisamente por sus limitaciones en términos de una dirección basada en el poder, evita que se rompa la lógica deliberativa propia de la sociedad civil.

Entre los efectos democratizadores de esta estrategia, a juicio de Sharp, encontramos el hecho de que por medio de la lucha no violenta, la población se dota de “*armas para la resistencia, que podrán usar para defender sus libertades tanto contra los dictadores existentes, como contra los que puedan existir*”. Más aún, incluso tras el derrocamiento de regímenes, las poblaciones que han practicado esta estrategia pueden retomarla en las fases posteriores de transición o consolidación democrática. Además, las estrategias no violentas presentan otras virtualidades:

- de una parte, permiten que la población confíe más en sí misma, en cuanto a su capacidad para desafiar las amenazas del régimen y la capacidad de este para la represión violenta; cuestión esta que remite a la dimensión subjetiva que posibilita el empoderamiento necesario para iniciar una estrategia masiva orientada a debilitar la capacidad de la dictadura;
- de otra parte, suministra armas con las cuales la población logra concentrar su poder contra la represión del gobierno, lo que remite a la lógica defensiva de la acción en la sociedad civil;
- y, finalmente, aporta un recurso para que la población y las instituciones independientes de la sociedad civil puedan restringir o negar los recursos de poder a la minoría gobernante, amenazando así su capacidad de seguir ejerciendo la dominación, lo que se vincula directamente con la dimensión ofensiva destinada a debilitar las capacidades de la dictadura.

Esta última cuestión, insistimos, remite al elemento subyacente a todo el análisis de Sharp: el derrocamiento del régimen solo es posible cuando éste ha perdido capacidad. Insistiremos en esta cuestión central en la operacionalización de nuestro modelo, ya que visualiza que más allá de las relaciones verticales de arriba-abajo que reflejan las afecciones estructurales sobre los actores, también existe una relación de abajo-arriba que debe ser tomada en cuenta, que refleja la capacidad de los actores para modificar el marco estructural.

En cualquiera de los casos, antes de abordar esta cuestión, y retomando el hilo argumental, Sharp aporta otros elementos democratizadores que subyacen a esta estrategia, claramente vinculados con la lógica en la que descansa el modelo de Cohen y Arato. Para éstos, como ya hemos comentado, la virtualidad de la desobediencia civil como expresión del “radicalismo autolimitado” de los movimientos sociales descansa en que se fundamenta en la lógica deliberativa del mundo de la vida, y no en la del poder, del sistema político. Pues bien, a juicio de Sharp, además de los argumentos ya apuntados, el carácter democratizador del desafío político masivo también se encuentra en varios elementos estrechamente ligados con esta concepción. A su juicio, el desafío político masivo prefigura los derechos que institucionalizan y racionalizan el mundo de la vida, y fortalece la sociedad civil de la que se nutre esta esfera:

La lucha no violenta se puede usar para defender la práctica de las libertades democráticas, tales como la de expresión, la prensa libre, las organizaciones independientes y el derecho a reunirse enfrentándose a controles represivos

La lucha no violenta contribuye en forma importante a la supervivencia, renacimiento y fortalecimiento de los grupos e instituciones independientes de la sociedad civil (...). Estos son importantes para la democracia por el valor que tienen para movilizar la capacidad de poder de la población e imponer límites al poder efectivo de cualquier dictador en potencia (ibíd., 37).

Aunque Sharp en su trabajo no profundiza en exceso en esta dimensión defensiva de la desobediencia civil, insistimos que ésta es un elemento central subyacente en su texto. Más aún, la aplicación de sus orientaciones en el caso de las revoluciones del Este muestra la importancia que para los actores ha jugado esta estrategia vertebradora, reflejada claramente en la utilización de símbolos identificativos (colores especialmente) que se convierten en un mecanismo de correduría que posibilita la vertebración simbólica y la visibilización de una comunidad resistente. De hecho, muchos de los métodos de acción no violenta que identifica en su texto, encajan directamente con esta lógica.

Por ejemplo, bajo el epígrafe de “*métodos de comunicación con un público más amplio*” destaca la importancia de los lemas, caricaturas y símbolos; banderas, carteles y pancartas; folletos y libros; periódicos y otras publicaciones; utilización de discos, radio y televisión; escritura de lemas contestatarios en el cielo y en la tierra. Más claramente, esta vertebración de la sociedad se lograría a través de otras estrategias delimitadas como “*actos públicos simbólicos*”: despliegue de banderas y colores simbólicos; utilización de símbolos en el vestido o vestir atuendos simbólicos; oración y culto; pintura como protesta; sonidos simbólicos; reclamaciones simbólicas; entrega de objetos simbólicos... Finalmente, añade a estos repertorios otro catálogo de acciones aún más claramente orientadas a esta lógica defensiva, como sátira y burlas colectivas, interpretaciones teatrales y musicales, canto, funerales – manifestaciones, homenajes en tumbas o cementerios, duelo político, etc...

A pesar de todo, donde Sharp pone el acento es en la lógica ofensiva.

- Por ejemplo, en el citado listado identifica 15 métodos de “*no cooperación social*” (delimitados en base a *propuestas de ostracismo de las personas* – excomunión, boicot social, por ejemplo-; *no cooperación en eventos sociales, costumbres e instituciones* –huelga estudiantil, suspensión de actividades sociales o deportivas-; y *retirada del sistema social* –desaparición colectiva, abandono de sus tareas por parte de los trabajadores-.
- A su vez, delimita 25 medios de “*no cooperación económica*” asentados en la estrategia del boicot y agrupados en lógicas como *acción de los consumidores* – no consumo de bienes boicoteados, boicot internacional-; *acción de trabajadores, productores e intermediarios* -boicot en los tres niveles-; *acción de dueños y administradores* -cierre patronal, boicot de comerciantes-; *acción de dueños de recursos financieros* -retirada de depósitos del banco, negarse a pagar deudas-; y acción por parte de otros gobiernos -embargos, etc...).

- Identifica otros 20 mecanismos de “*no cooperación económica*” agrupados a través de la estrategia de la *huelga*: simbólicas; agrícolas; de grupos especiales; industriales; restringidas; de varias industrias.
- Describe, además, 35 estrategias de “*no cooperación política*”, basado en lógicas como el rechazo a la autoridad; la no cooperación de los ciudadanos con el gobierno; alternativas a la obediencia; acciones personales del gobierno; acción gubernamental constituyente; acción gubernamental internacional.
- Finalmente, enumera 30 tipos de “*acciones de intervención no violenta*”, de carácter *psicológica* -acoso no violento, por ejemplo-; *física* -invasión no violenta-; *social* -sobrecarga de las instalaciones-; *económica* -ocupación no violenta de tierras-; y *política* -buscar el encarcelamiento, o soberanía dual y gobierno paralelo-.

Como decimos, a pesar de que el tratamiento de la lógica ofensiva es más acabado, la importancia de la dimensión defensiva orientada a la vertebración de la sociedad civil es, precisamente, el punto de partida del trabajo de Sharp. A juicio de este analista, la profundidad del problema de las dictaduras no solo estriba en la capacidad que tienen para generar obediencia y/o apatía, sino que ésta, precisamente, se fundamenta en la debilitación, subordinación o reemplazamiento deliberado, por parte de estos regímenes, de las instituciones sociales, económicas, políticas y hasta religiosas que vertebraban la sociedad civil. Más aún, el éxito de las dictaduras se encuentra en su capacidad de atomizar a la población, convirtiéndola en una masa de individuos aislados “*incapaces de trabajar juntos para conseguir su libertad, de confiar los unos en los otros y hasta de hacer algo por su propia iniciativa*” (Sharp, 2010: 3).

El resultado es predecible: la población se ha vuelto débil, carece de confianza en sí misma y es incapaz de ofrecer resistencia alguna. Las personas por lo general están demasiado asustadas para compartir su odio por la dictadura y su hambre de libertad ni aún con su familia y amigos. Están, con frecuencia, demasiado aterrorizadas para pensar

en serio en la resistencia popular. De cualquier manera ¿de qué iba a servir? En vez de esto asumen el sufrimiento sin objetivo y un futuro sin esperanza.

Así, cuando este analista identifica las cuatro tareas que deben encarar los insurrectos, observamos cómo se delimita una tarea que, partiendo de la politización y empoderamiento de la sociedad, se orienta al fortalecimiento de un contrapoder comunitario, para desde allí sentar las bases de una estrategia ofensiva:

Cuando se quiere echar a bajo una dictadura con la mayor efectividad y el menor costo, hay que emprender estas cuatro tareas:

- Se debe fortalecer a la población oprimida en su determinación de luchar, en la confianza en sí misma y en sus aptitudes para resistir
- Se debe fortalecer a los grupos sociales e instituciones independientes del pueblo oprimido
- Se debe crear una poderosa fuerza de resistencia interna y;
- Se debe desarrollar un amplio y concienzudo plan estratégico global para la liberación, y ejecutarlo con destreza (ibíd., 8)

Dicho de otra forma, en las propias palabras de Sharp, son tres los factores más importantes que determinan hasta qué punto está controlado el poder por parte del gobierno: *“el deseo relativo por parte de la población de ponerle límites al poder; la fuerza relativa de las organizaciones e instituciones independientes para quitarle colectivamente los recursos que necesita el poder; y la relativa capacidad por parte de la población para negarle su consentimiento y apoyo”* (22)

Para encarar la dimensión defensiva, Sharp parte del valor de las instituciones de la sociedad civil, entendidas como *“instituciones [que] establecen sus propios objetivos y [que] ayudan a satisfacer las necesidades de la sociedad”*. Pero, más allá de esta cuestión, estos grupos tienen un importante potencial político ya que *“suministran las bases grupales e institucionales para que la gente pueda ejercer su influencia en la sociedad y resistir la de otros grupos o gobiernos cuando éstos claramente se*

inmiscuyan injustamente en sus intereses, actividades y propósitos". En consecuencia, en la medida en que la dictadura sea capaz de disolver estas instituciones o controlarlas, como hemos visto, el poder mantendrá intacta su capacidad. Por ello, *"el crecimiento continuado e independencia de estas instituciones es a menudo el requisito previo para el triunfo de la lucha de liberación"* (ibíd., 23).

Por supuesto, nada de esto significa que sea fácil debilitar o destruir una dictadura, ni que cualquier intento de hacerlo tendrá éxito. Desde luego no quiere decir que la lucha estará libre de víctimas, porque los que todavía estén sirviendo a la dictadura van a contraatacar en un esfuerzo por obligar a la población a regresar a la cooperación y la obediencia. Sin embargo, esta nueva percepción del poder significa que la desintegración deliberada de la dictadura sí es posible (ibíd.).

De forma que, esta debilidad de la sociedad, que debe ser corregida, es la contraparte de la otra cara de la moneda en los regímenes dictatoriales; precisamente la dimensión sobre la que Sharp centra la mayor parte de su análisis: la riqueza y el poder están claramente concentrados en el régimen. En consecuencia, la estrategia de los desobedientes debe orientarse a limitar estas capacidades.

Para encarar la lógica ofensiva, Sharp parte de la delimitación de los fundamentos del poder en los regímenes dictatoriales. Comienza, pues, con una afirmación contundente: *"los dictadores reciben ayuda de los gobernados, sin la cual no pueden disponer de las fuentes de poder ni conservarlas"* (ibíd., 18). Entre las fuentes de poder, identifica la *autoridad* (creencia en la legitimidad del régimen y obediencia consecuente); los *recursos humanos* (cantidad e importancia de grupos y personas que obedecen o apoyan); *conocimiento* y destrezas de las personas o grupos que cooperan con él; factores *intangibles* de carácter psicológico o ideológico que alimentan la obediencia y la cooperación; recursos *materiales*, entre ellos los naturales, de comunicación o transporte; y las *sanciones* y castigos con los que se amenaza a la población, o aplican a los que desobedecen.

Pero, continúa, *“todas estas fuentes, sin embargo, dependen de la aceptación del régimen, del sometimiento y obediencia de la población al mismo y de la cooperación que le brindan innumerables personas y muchas instituciones de la sociedad. Estas fuentes de poder no están garantizadas”* (ibíd., 19).

El negarles a los agresores y dictadores la cooperación popular e institucional disminuye y puede anular el acceso a las fuentes de poder de las que dependen los gobernantes. Sin el acceso a tales recursos, el poder de los gobernantes se debilita, y finalmente se disuelve. (...)

Si, a pesar de la represión, se pueden restringir o recortar durante un tiempo suficiente los recursos de los que depende el poder, los resultados pueden ser la incertidumbre y la confusión dentro de la dictadura. Es probable que sobrevenga entonces un notable debilitamiento del poder. Con el tiempo, el quitarle los recursos al poder producirá la parálisis y la impotencia del régimen y, en casos muy severos, su desintegración. El poder de los dictadores se irá muriendo, lenta o rápidamente, de inanición política (20)

Llegados a este punto, Sharp describe cuáles son los puntos débiles de una dictadura. Por citar algunos de ellos, este analista señala que es posible restringir o negar la cooperación; que las decisiones previas del régimen tienen consecuencias imprevistas posteriores; que el sistema se puede rutinarizar; que la ideología puede erosionarse; que una fuerte ideología puede conllevar que el régimen desatienda las necesidades reales de la población; que la burocratización puede limitar su funcionamiento; que es posible que haya contradicciones internas; que la jerarquía de poder es inestable; que la policía o el ejército pueden tener intereses propios; que las diferencias nacionales, de clase o regionales pueden agudizarse, etc... *“La conclusión es obvia. A pesar de la apariencia de fuerza, todas las dictaduras tienen sus debilidades, sus ineficiencias internas, sus rivalidades personales, sus funcionamientos institucionales defectuosos y sus conflictos entre organizaciones y departamentos. Estas debilidades, con el tiempo, tienden a hacer al régimen menos efectivo y más vulnerable a los cambios y a la resistencia deliberada”* (ibíd., 28).

Desde este momento, Sharp comienza a desgranar una serie de recomendaciones y orientaciones destinadas, fundamentalmente, a racionalizar la lógica ofensiva de la sociedad civil.

- Apunta que a partir del repertorio de más de 200 técnicas a las que hemos aludido, es posible que *“a cualquier régimen ilegítimo le cause graves problemas el uso de un número considerable de estos métodos, cuidadosamente escogidos, aplicados persistentemente y en gran escala, fundidos en el contexto de una sabia estrategia y de tácticas apropiadas, por civiles adiestrados”* (31).
- Postula que un diagnóstico de la realidad permitirá identificar el elemento problemático nuclear de la dictadura, aplicando de forma estratégica mecanismos de desafío políticos si la vulnerabilidad está en este ámbito; económicos si la debilidad se encuentra en este espacio, etc...
- Estos actos pueden aplicarse en contextos de vida normalizada, de forma que la semejanza entre las acciones no violentas y las actividades normales de la gente -que para activarlas a penas se desvían de sus prácticas habituales- hacen que la participación sea más sencilla para la mayor parte de las personas: ejemplos de este tipo son la participación en ceremonias religiosas cargadas de crítica política o la comisión de “errores” en las fábricas.
- Los actos, a su vez, deben ser públicos (excepción de algunas actividades estratégicas que pueden ser clandestinas) ya que de esta forma se rompe con la lógica del miedo que subyace a las acciones no visibles. Además, esta visibilidad solventa el grave problema de los actos clandestinos, que reducen el número de personas que podrían participar, siendo en consecuencia incompatibles con el desafío político masivo.
- Es necesaria una actitud ejemplarizante de los activistas que atraiga a más personas, para garantizar, nuevamente, el carácter masivo de los actos en la fase decisiva.

- Es fundamental una profunda disciplina no violenta que evite la desviación de la estrategia hacia fórmulas de confrontación violentas; en paralelo, esta disciplina es fundamental, especialmente en contextos de fuerte represión, para lograr alineamientos inestables de las élites y, en el mejor de los casos, su deserción.
- De producirse actos violentos, que pueden ser inevitables, es fundamental que éstos no aparten al movimiento de la estrategia del desafío político masivo, de forma que las expresiones violentas tienen que ser separadas geográficamente, temporalmente y temáticamente de la acción no violenta.
- Las demandas que se realizan a actores que comienzan a comprometerse deben ser limitadas y relativamente fácilmente asumibles, como primer paso para elevar posteriormente las exigencias de compromiso.

Además de todo esto, para Sharp es necesario elaborar una estrategia concienzudamente planificada, en la que ninguna variable puede ser olvidada. Así, considera necesario establecer una gran estrategia que defina el horizonte que se pretende alcanzar, más allá del derrocamiento, a fin de evitar una perversión de la revolución. Es necesario, en paralelo, una estrategia que pase por la identificación de los nodos de poder que deben ser debilitados. Además, se deben delimitar las tácticas para actuar sobre ellos. Y, finalmente, se deben ordenar y temporalizar los métodos.

Por ello, considera importante aplicar una lógica gradualista comenzando con acciones diseñadas para probar el estado de ánimo de la población. Estas primeras acciones pueden tomar la forma de protestas simbólicas, como ofrendas florales u ocupaciones físicas de espacios. La virtualidad de estos recursos es llamar la atención internacional y nacional, así como preparar a la población para estrategias más osadas. Pero este tipo de actos simbólicos, en sí mismos, no son suficientes; dicho de otra forma, permanecer dentro de lo simbólico no altera la posición de poder de la dictadura. Ello obliga a estrategias orientadas a la distribución de responsabilidades parciales a diversos sectores de la población (estudiantes centrados en huelgas, ferroviarios en el boicot de las comunicaciones, etc...). Es ésta una dimensión importante, destaca, ya que la

resistencia selectiva “*consiste en defender la existencia y autonomía de los grupos políticos, económicos y sociales así como de las instituciones fuera del control de la dictadura*” (ibíd., 64) (de esta forma, la dimensión ofensiva de la acción se traba con la defensiva, que refuerza la sociedad civil).

A partir de estas bases, se puede comenzar a apuntar directamente al poder del dictador aplicando una no cooperación popular masiva que limite su capacidad y haga visibles las contradicciones que el proceso haya generado. En este contexto, es importante tener en cuenta que tan vital como atraer a la lucha a sectores antes alineados con el régimen, es lograr la neutralidad de otros, especialmente las fuerzas militares, como se ha visto de claramente en la “primavera árabe”. Por ello, recomienda que desde el inicio de la campaña se desarrolle una estrategia de comunicación con las tropas (técnica utilizada durante 2 años por los disidentes en Georgia, que desarrollaron una campaña por la que niños anónimos de escuelas enviaban cartas, dibujos y regalos a policías, con el objeto de neutralizar su voluntad represiva cuando llegara el momento clave del proceso). Sin embargo, rechaza que el intento de ganarse sus simpatías tenga que ser visto como una invitación a las fuerzas militares para que interrumpan la dictadura por medio de la fuerza militar. Como en la práctica se ha visto en Egipto “*una acción semejante no es posible que de paso a una democracia que funcione porque (...) sirve de poco para cambiar el desequilibrio entre gobernantes y gobernados*” (ibíd., 66).

Esta insistencia en la “neutralización” de la capacidad represiva del régimen es casi profética, si se observan las derivadas Libia y especialmente Siria: “*los estrategas del desafío deben recordar que va a ser extraordinariamente difícil, sino imposible, desmantelar la dictadura si la policía, la burocracia y las fuerzas armadas se mantienen plenamente leales y obedientes en el cumplimiento de sus órdenes*”. Sabiendo que las consecuencias de un desalineamiento de estos actores son especialmente graves (como se ha visto en los primeros momentos de las revueltas en Siria y Libia, en las que fueron abundantes las ejecuciones de soldados que se negaban a ejecutar las órdenes), Sharp propone que los desobedientes militares utilicen técnicas de

“*obediencia simulada*”, pero orientada a dificultar el cumplimiento de las ordenes represivas.

Una vez iniciada la lógica del desafío político, Sharp insiste en la necesidad de combinar la estrategia ofensiva de retirada de recursos del régimen, con la defensiva de articulación de contrapoderes. “*Con el tiempo, esta combinación de resistencia y construcción de instituciones puede conducir a la libertad de facto*” (ibíd., 71). Desde este momento, los disidentes pueden dar el salto de la resistencia selectiva al desafío masivo, y al derrocamiento de la dictadura. Un derrocamiento, concluye Sharp, que debe pasar por el derrumbamiento del régimen, razón por la que descarta cualquier salida negociada al conflicto.



En definitiva, el texto de Sharp muestra en la práctica la virtualidad del modelo de Cohen y Arato, confirmando la importancia que tiene para los movimientos sociales, en contextos extremos, la doble lógica defensiva y ofensiva de su accionar. En paralelo, permite visualizar que la consideración de estos teóricos sobre el carácter de radicalismo autolimitado que atribuye a los movimientos sociales en las democracias liberales, también está presente en la estrategia de los disidentes que pretenden derrocar regímenes no democráticos. Finalmente, la aplicación de las teorizaciones de Sharp demuestra que en la relación entre estructuras y actores, más allá de las afecciones de las primeras sobre éstos, también es posible una lógica de abajo arriba en la que los

actores cambien las estructuras. Obviamente, ambas dimensiones están trabadas en una relación de doble dirección. Ello obliga a profundizar en la pista que nos aportan Cohen y Arato, en el plano teórico, y Sharp, en el práctico, pero trabando esta lógica con la de la afección estructural. Necesitamos, en consecuencia, detener nuestra mirada en la última pieza de nuestro modelo, la agencia que media entre estructuras y actores.

Pero, el tratamiento de esta agencia no puede realizarse de forma abstracta, sino que debe ser operacionalizado para permitir que en una asignatura como la de cambio y conflicto político pueda comprenderse por qué los regímenes cambian (o no), cómo cambian, y quién o qué es el motor del cambio. En consecuencia, la operacionalización de la agencia debe incorporar dimensiones estructurales, pero también las que tienen que ver con las estrategias, voluntades y movilizaciones de los actores, amén de integrar ambas cuestiones con la dimensión de la conciencia. En este sentido, asumimos como opción metodológica el tratamiento de la agencia a través de las teorías de la acción colectiva de los movimientos sociales.